

Década de oro de la infraestructura



MARTA LUCÍA RAMÍREZ
Vicepresidenta de la República

Los avances del Gobierno del presidente Duque en infraestructura de transporte, son numerosos. Recibimos el país con dificultades en el sector, en cuanto al avance de obras, cierres financieros, aprobación de licencias y permisos, y, toma de decisiones importantes, al punto que, de los 29 proyectos de 4G solamente seis estaban activos.

Hoy, tenemos 22 proyectos en pleno funcionamiento, los cierres financieros ya suman 18, se han generado 69.862 empleos. Todo ello se refleja claramente en el crecimiento del sector: 13% en el tercer trimestre.

El Gobierno ha generado condiciones para que actores públicos y privados puedan cumplir con sus tareas. El fortalecimiento de las instituciones ha sido fundamental. La nueva Comisión Intersectorial de Infraestructura ha permitido liderar soluciones que debería aportar cada entidad, con un mandato claro y el impulso a iniciación de obras para llevar a las regiones el desarrollo por tantos años aplazado, generando empleo.

Solucionar proyectos, a través de vías institucionales, ha significado seguridad jurídica para concesionarios y financiadores. Con legalidad, la inversión necesariamente debe aumentar. Hay tareas pendientes en materia institucional, como robuste-

cer las entidades que aprueban permisos y licencias ambientales, y organismos que expiden certificados de presencia y afectación de comunidades étnicas -acatando la Sentencia SU-123/2018 de la Corte Constitucional- en la que trabaja el Gobierno Nacional.

Encontramos una situación fiscal que imponía serias limitaciones en la disponibilidad de recursos para infraestructura de transporte. Pero identificamos reformas requeridas para fortalecer la institucionalidad del sector, desarrollar nuevas fuentes de pago y financiación y titularizar concesiones vigentes.

Garantizar condiciones de mantenimiento de obras a largo plazo, desarrollar el sistema logístico mejorando la competitividad nacional, y la posibilidad de generar atractivos para iniciativas público-privadas que no requieran fondos públicos ni dependan de espacio fiscal. Merece explorarse, desde el punto de vista técnico y jurídico, la utilización del valor residual de concesiones maduras, obras ya construidas en etapa de mantenimiento que producen excedentes de ingresos. El dinero que se genere por concesiones de ese tipo, se utilizaría para pagar la deuda derivada del proyecto e invertir en construcción de otros. Se materializaría esta opción acudiendo a titularización de flujos, emisión de bonos u otorgamiento de garantías, entre otros. Conviene revisar ajustes normativos que se requieren para adecuar competencias de una entidad existen-

te o crear una a la cual se pueda transferir y ella, a su vez, recibir este tipo de activos-proyectos, para titularizarlos en acciones que se vendan en el mercado y generen recursos adicionales o emitir bonos correspondientes.

Estamos estructurando proyectos más cercanos a las comunidades, que aporten no sólo cemento y ladrillos, sino que involucren y atiendan necesidades de poblaciones en área de influencia. Le apostaremos a una nueva generación de concesiones (5G), en la que estamos planteando un porcentaje en inversiones sociales, para conectar no solo transporte, sino mejorar calidad de vida. El Gobierno definió el intermodalismo, objetivo central en temas de transporte, logística y competitividad, consolidando el modo férreo, uno de los eslabones de esta cadena. Podemos decir hoy que tenemos un Gobierno cercano a las regiones, que escucha y atiende sus inquietudes. Las obras muestran avances significativos, lo que, por supuesto genera satisfacción y redobla también nuestro compromiso para no bajar la guardia.

El gran reto es el de luchar contra la corrupción. Es deber ineludible de servidores, pero también de particulares y empresarios, que los recursos que deben destinarse a construcción de proyectos, generación de empleo, incremento de productividad y conectividad, para mejorar las condiciones de vida de los colombianos con justicia y equidad, no terminen en bolsillos de algunos pocos.



CONSEJOS PARA LÍDERES

MAURICIO RODRÍGUEZ
@liderazgomr

Para hacer algo valioso en la vida no podemos quedarnos quietos temblando al pensar en los peligros, debemos dar el salto y movernos sin cesar hasta alcanzar nuestra meta.

Sydney Smith

Amazonía y ciudades

El Sínodo para la Amazonía advierte: "La selva amazónica es un 'corazón biológico' para la tierra cada vez más amenazada. Se encuentra en una carrera desenfadada a la muerte. Requiere cambios radicales con suma urgencia, en una nueva dirección que permita salvarla" (§ 2). Y entre los diversos asuntos que se tratan en el documento final se hace referencia al derecho "al disfrute equitativo de las ciudades dentro de los principios de sostenibilidad, democracia y justicia social" (§ 35).

Es loable que la Iglesia Católica llame la atención sobre la necesidad de conservar el planeta. La "casa común" (Encíclica Laudato Si') tiene que ser protegida. El Sínodo introduce el "pecado ecológico", y lo define como un daño que se le hace a las futuras generaciones, y que "se manifiesta en actos y hábitos de contaminación y destrucción de la armonía del ambiente" (§ 82).

Al mirar hacia la naturaleza la Iglesia trata de rescatar la inmanencia. Es un intento por salir del mundo platónico que exalta la virginidad, consagra el dolor y coloca la bienaventuranza definitiva en los cielos. El cambio de óptica es evidente. Ahora se comienza a reconocer que la vida y la felicidad están en la tierra, y sin la conservación del planeta no es posible disfrutar la existencia. Mientras que **Bolsonaro** dice que la Amazonía es del Brasil, el Sínodo afirma que es el "corazón biológico" del planeta. Es un llamado a la responsabilidad colectiva.

Aunque los cambios que se requieren son urgentes, no existe una institucionalidad planetaria que sea capaz de ordenar, controlar y sancionar. Este vacío de poder, junto a la falta de conciencia ecológica, se expresa en una alarmante deforestación. Mientras que se avanza en la búsqueda de una solución global, es importante que los habitantes de las ciudades entendamos la relevancia que tiene la Amazonía para el buen disfrute de la vida urbana.

EN COLOMBIA TODAVÍA ESTAMOS MUY LEJOS DE LLEGAR AL URBANISMO SOSTENIBLE

La búsqueda de las condiciones que permitan que las ciudades sean sostenibles, como propone la Nueva Agenda Urbana (Hábitat III) obliga a que los habitantes de los centros urbanos se responsabilicen de la sostenibilidad de los ecosistemas.

Uno de los argumentos que más se repite para justificar la falta de acción frente al Amazonas es el económico. Una y otra vez se dice que no hay recursos. Este tipo de afirmación desconoce los vínculos estrechos que existen entre sostenibilidad y equidad. La única manera de garantizar la armonía con el planeta es redistribuyendo. Y, entonces, parte de la riqueza que han acumulado las sociedades urbanas tiene que destinarse a la protección ambiental. Los impuestos actuales son muy débiles, y los recursos obtenidos son insuficientes para responder con urgencia a las necesidades que impone el cambio climático, y la justicia intergeneracional. Se tienen que diseñar mecanismos que permitan que los recursos de las ciudades financien los grandes proyectos ambientales.

En Colombia estamos muy lejos del urbanismo sostenible. Las cuatro grandes ciudades deberían comenzar por financiar inversiones relacionadas, por ejemplo, con la conservación de la biodiversidad pacífica, la reforestación, la recuperación de las cuencas, la descontaminación de los ríos, etc. Y, obviamente, para ello se requieren mayores impuestos al suelo y al urbanismo. Aceptar esta realidad apenas sería dar un primer paso hacia la equidad intergeneracional.

TRIBUNA UNIVERSITARIA

Sujetos sin personalidad



JOHAN CALDAS
Estudiante de derecho
caldasjohan@gmail.com

Posiblemente, uno de los temas que ha marcado con mayor determinación la agenda política y social de la humanidad durante las últimas décadas ha sido la preservación de aquello que nos fue dado: la naturaleza. En palabras del Papa Francisco, el cuidado de la casa común. En este sentido, han sido múltiples las iniciativas que se han propuesto para contribuir con este objetivo, aunque, muchas de estas, incluso bien intencionadas, terminan por ser ineficientes.

Ese posiblemente sea el caso de una iniciativa muy particular que ha allanado camino en el ordenamiento jurídico: reconocer como sujeto de derecho a determinados ecosistemas. Una condición jurídica que implica la atribución de derechos, pero también de obligaciones.

En Colombia han sido varios casos en los cuales, vía jurisprudencia, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han

otorgado la condición de sujeto de derecho a distintos ecosistemas. Entre estos, posiblemente los más conocidos sean los fallos proferidos sobre el Amazonas, el Río Atrato y hace poco, el Río Magdalena.

En el fondo de la discusión queda clara la buena intención de las altas cortes que, con dichas medidas, han buscado preservar la conciencia y el deber que asiste a la humanidad de cuidar el medio ambiente. Sin embargo, dicha iniciativa es realmente ineficiente por varios motivos que detallo a continuación.

En primer lugar, la Constitución Política, en sus artículos 70, 80 y 95, establece que son deberes a cargo del Estado y del ciudadano preservar y conservar los recursos naturales. Así mismo, consagra del derecho de todos a gozar de un ambiente sano. Por ende, el desarrollo de dichos preceptos constitucionales daba suficiente sustento jurídico para tomar las acciones que fueran necesarias en torno a preservar los ecosistemas señalados. En este sentido, la condición de sujeto de derecho no ofrece una obligato-

riedad mayor respecto del deber que nos asiste ni del derecho que nos beneficia.

En segundo lugar, hacer extensiva la condición de sujeto de derecho a los ecosistemas implica afectar directamente el alcance y sentido de una figura que es un pilar fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. Con esto se rompe la relación sustancial entre sujeto de derecho y capacidad.

En tercer lugar, al recurrir a los resultados prácticos, se evidencia que luego de años de haber otorgado dicha condición al Amazonas y al Río Atrato, la preservación de dichos ecosistemas no ha tenido progresos significativos, entre otras cosas porque la figura jurídica no garantiza la articulación institucional, la voluntad ni el financiamiento necesarios para el cumplimiento del fin propuesto.

Por lo anterior, vale la pena señalar que, si bien se urge desarrollar estrategias innovadoras que busquen preservar los recursos naturales, dicha innovación debe corresponder a la relevancia práctica de las medidas adoptadas y no a mutaciones jurídicas contraproducentes.